

EL CICLO MACRISTA: UNA NUEVA DERECHA.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ENTRE EL AJUSTE FISCAL Y EL MODELO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Sebastián Gómez

Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Educación (UBA). Docente del Departamento de Ciencias de la Educación, UBA. Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Lugar de trabajo, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Correo electrónico: sebastianjorgegomez@gmail.com



Tal vez sea posible conceptualizar al gobierno nacional comandado por Mauricio Macri como una nueva derecha. Es decir, un gobierno que expresa clásicas prerrogativas de la derecha política pero, simultáneamente, contiene una serie de novedades que lo tornan irreductible a otras experiencias conservadoras en nuestro país. En principio, se podría pensar que el macrismo como fenómeno político es un heredero por derecha o “desde arriba” de la crisis de 2001: objeta la política tradicional y pretende renovarla a través de figuras que no solían frecuentar los circuitos de la sociabilidad política habituales; aduce el reemplazo de la “vieja política”, de manera paulatina, por una “nueva”, más eficiente, honesta y moderna. Macri se constituyó en el primer presidente electo democráticamente que no proviene ni del peronismo, ni del radicalismo. Si bien Cambiemos da cuenta de una alianza con sectores o actores políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical (UCR), la fuerza principal responde al presidente: Propuesta Republicana (PRO), fundada en 2005. Desde un principio, Macri dejó en claro que su gobierno nacional no era de coalición,

concentrándose las principales decisiones en su grupo político que frecuentemente se presenta como alternativa a la política tradicional.

Indudablemente, la administración macrista expresa una serie de continuidades políticas con otras tendencias de signo conservador que han gobernado al país. Tal vez, en el plano local, las principales e inmediatas líneas de referencia se puedan encontrar en las administraciones neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y de la Alianza comandada por Fernando de la Rúa (1999-2001). Pero a diferencia, por ejemplo del menemismo, el macrismo no se presenta (al menos hasta el momento y en los hechos) como abiertamente privatizador o antiestatista. También guarda singularidades en términos político-culturales, irreductibles al neoconservadurismo tradicional. Si bien en varios momentos suele exhibir un costado netamente conservador y reaccionario, y franjas del gobierno comparten una ideología católica y conservadora, también es cierto que el macrismo suele cultivar un aire cosmopolita, promueve un vínculo hedonista e individualista (plácido, móvil, flexible) con el espacio público y valores de una filosofía postmaterialista (desde la instalación de centros de “vida sana” o ferias macrobióticas, pasando por la promoción de un budismo de nuevo tipo, hasta el cuidado del medio ambiente).¹ Su concentración en políticas para las áreas de seguridad y el espacio público, en detrimento de la salud, la vivienda, la educación o la ciencia y la tecnología, quizás manifieste su prioridad del momento público por el estrictamente estatal: garantizar el tránsito y esparcimiento en el espacio público sin la necesidad de que el Estado amplíe el acceso a derechos sociales básicos.

La orientación político-económica del macrismo apunta a actualizar el camino recorrido por las administraciones neoliberales con un sentido propio, es decir, articular la promesa moralizadora de la Alianza con la promesa modernizadora del menemismo. Para tal fin, elaboró un diagnóstico que asoció los problemas del país, ya no sólo a la política

¹ Desde luego, el modo de tratar los problemas comunes, como el medio ambiente, remite al clásico liberalismo: la responsabilidad recae en prácticas individuales. Esto es, el macrismo apuesta a su resolución a través de la agregación de comportamientos personales que, en su sumatoria, conducirían a mejorar la calidad de vida colectiva. En el caso del medio ambiente, no cuestiona la contaminación producida por el modo de acumulación capitalista, ni cumple con las políticas medioambientales como Ley de Basura Cero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero distribuye “ecobolsas” o invita a transitar por bicisendas en reemplazo del contaminante automóvil.

tradicional y su habitual corrupción e ineficiencia como diagnosticaban sectores conservadores en los albores de la crisis de 2001, sino también al “populismo estatalista”. Al clivaje entre vieja y nueva política, le añadió recientemente populismo y república. Propuso así un cambio cultural refundacional que bajo una visión liberal-republicana de las instituciones del Estado y el retorno del país al “mundo”, prometía la llegada de múltiples inversiones extranjeras. El macrismo adoptó una gestión macroeconómica con un enfoque netamente liberal: apertura comercial, liberalización del movimiento de capitales, desregulación, aumento exponencial de la deuda externa y una verdadera transferencia de ingresos de los sectores populares y medios a las franjas de la burguesía, principalmente, financiera y agraria. Pero, tal vez atendiendo al desenlace de otras administraciones neoliberales que se despreocuparon por los efectos sociales de sus políticas, la actual administración contiene una concepción de la política social como una red de contención mínima para evitar estallidos antes que una estrategia de ampliación de derechos. Así dismanteló una serie de políticas, pero con el resguardo de sostener ciertos programas que garanticen su gobernabilidad de signo neoliberal.

Sería posible distinguir dos fases en esta gestión macroeconómica. La primera, que se podría denominar *gradualista*, abarca desde la asunción del gobierno hasta mediados de 2018, cuando irrumpe una severa crisis financiera. La segunda, más cercana a las clásicas políticas de *shock*, es la respuesta del gobierno a dicha crisis: un retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar un *default* pero a condición de seguir sus recetas y, por tanto, acelerar drásticamente las políticas de reducción del denominado déficit fiscal.² En esta segunda fase, el gobierno, entre otras medidas, devaluó bruscamente la moneda, aplicó severos recortes a los subsidios estatales y a la inversión pública, reduciendo sensiblemente el poder adquisitivo de los sectores medios y populares. La voluntad del gobierno por mostrarse dispuesto al recorte fiscal ante el FMI implicó la

2 Vale precisar que si bien a mediados del 2018 aconteció una crisis financiera en los llamados países emergentes, el gobierno nacional había desregulado una serie de mecanismos (como, por ejemplo, el control del tipo de cambio) en su afán de apertura al “mundo”, por lo que el impacto de dicha crisis fue mayor en Argentina.

reducción o directa eliminación de Ministerios y diversas Secretarías. Si el modelo político-económico gubernamental aplicado desde el inicio de la gestión era inviable para los 40 millones de argentinas/os (Scalleta, 2017), tal condición se ha acelerado y evidenciado en su fase de *shock*. El propio Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mostró un llamativo orgullo en noviembre de 2018: “Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno”, declaró.

Es posible sugerir cierta articulación de la política educativa macrista con las fases en la gestión de la macroeconomía: si los recortes comenzaron de una manera gradual en la cartera educativa, se han acelerado bruscamente desde mediados del 2018. Por su parte, las líneas de continuidad con administraciones de signo neoliberal son elocuentes en materia educativa pero también la administración guarda ciertas singularidades, propias de una nueva derecha. Existen distintos aspectos a fin de ilustrar el asunto, pero tal vez una genuina expresión sea la figura de Esteban Bullrich que asumió en diciembre de 2015 un Ministerio que retomó la nominación de los años 90: Educación y Deportes. Como tantas otras y otros jóvenes, se acercó a la política con posterioridad a la crisis de 2001. Optó por incorporarse a las filas del partido político Recrear para el Crecimiento, fundado en 2002 y liderado por el efímero Ministro de Economía del gobierno de la Alianza: Ricardo López Murphy. En marzo de 2001, este economista había anunciado una serie de medidas de ajuste en el sector público y, particularmente, en las universidades públicas como así también una racionalización burocrática (reducción) de la cartera educativa y su presupuesto. La tentativa fracasó fundamentalmente por las resistencias de la comunidad educativa. En consecuencia, López Murphy renunció al Ministerio. Se podría pensar que aquellas frustradas metas, han sido actualizadas por el ya no tan joven Esteban Bullrich (y continuadas por su reemplazante en el Ministerio de Educación y Deportes en julio de 2017: Alejandro Finocchiaro).

Además de provenir de una fuerza política surgida con posterioridad a la crisis de 2001 que prometía una renovación de la política tradicional, Esteban Bullrich se forjó en el

mundo de las fundaciones. Entre otras, ofició de Director de Educación de la fundación Carta Política, creada por el abogado católico conservador Hugo Martini a inicios de 2001. Más adelante, en 2008, participó y animó, junto a Guillermo Dietrich, la fundación G25, decisiva en la acumulación y expansión política del PRO a nivel nacional (Vommaro, 2017). Una especie de *think tank* estadounidense, estas fundaciones buscan conformar programas de gobierno, al tiempo que facilitar el traspaso de empresarios o dirigentes vinculados al sector privado a la política estatal. Como expresión de los contornos de una nueva derecha, el programa de la fundación G25 alentaba el involucramiento de los “mejores” del mundo privado al plano estatal; la importación hacia la vida pública de valores asociados a la eficiencia, transparencia y gestión del ámbito privado. En definitiva, para Bullrich, la salida a la crisis de 2001, transcurría no por renunciar al ámbito político-estatal sino más bien por renovarlo en una clave pragmática, eficiente y alejada de las contiendas político-ideológicas tradicionales.

Llamativamente para un gobierno que augura transparencia en el tratamiento de la información pública, aún no existen datos por parte de la Secretaría de Políticas Universitaria que permitan un análisis de la evolución del acceso, permanencia y egreso universitario en el ciclo macrista. Sólo ha sido publicada información relativa al año 2016. De todas maneras, atendiendo a otros indicadores e indicios, se puede inferir que el gobierno aplica sobre el tópico el modelo liberal de la igualdad de oportunidades (Dubet, 2016) que afecta sensiblemente a las trayectorias universitarias de las mayorías populares. En términos filosóficos, el enfoque de la igualdad de oportunidades supone que la sociedad no está integrada por sectores o colectivos (ni mucho menos, por clases sociales) sino por individuos quienes se agregan voluntariamente en asociaciones más amplias pero siempre fluidas y cambiantes. Así, la desigualdad es tan inevitable como deseable en tanto condición para la competencia, por lo que el Estado debe limitarse a construir una línea de partida para dejar fluir los desempeños individuales. Apuesta al progreso mediante el esfuerzo, mérito y autogestión individual, más que a través de la construcción y garantía de

derechos sociales. Como correlato, esta filosofía implica un abierto cuestionamiento a aquellos que “no se esfuerzan” y se refugian ya sea en el cuidado estatal (que provee educación, salud o planes sociales con un contraprestación laboral) o en la supuesta comodidad del trabajo estatal. También presupone la exclusión, al menos por un tiempo, de individuos a ciertos bienes (como la educación universitaria) porque no reúnen las condiciones mínimas para la competencia. En ese sentido, consideran inequitativa la inversión del Estado en bienes que suelen acceder individuos socialmente favorecidos y prefieren (teóricamente) concentrarse en aquellos otros consumidos por las mayorías (por ejemplo, jardines de infantes o el nivel de estudios primarios).³ De este modo, el derecho en su acepción universal a determinados bienes resulta cuestionado. Más aún, al no impugnarse la estructura social injusta o el carácter regresivo del régimen tributario y suponer que el Estado administra recursos que, por definición, son escasos, el modelo de igualdad de oportunidades pretende mostrarse como el más equitativo al concentrarse en los/as “pobres meritorios/as”; no pretende reducir la desigualdad social sino luchar contra los obstáculos que inhiben la operación del mérito (como si éste se desarrollara por fuera de precisas condiciones sociales e institucionales). Es plausible pensar que el modelo en cuestión opera, para los sectores dominantes, como una forma de legitimar, a través del mérito, posiciones socio-educativas privilegiadas en sociedades supuestamente modernas o abiertas que no se estructuran explícitamente por criterios hereditarios.

Más allá de la retórica del presidente que suele apelar a la “igualdad de oportunidades”, la aplicación de este modelo al ámbito universitario es posible registrarlo en una serie de políticas e intervenciones del PRO. En octubre de 2015, cuando se reformó la Ley de Educación Superior (24.521/1995) para garantizar la gratuidad del nivel, el diputado del PRO Eduardo Amadeo se opuso. Al calor del debate parlamentario, opinó que en las

3 Desde luego, el asunto suele terminar en una mera declamación. A propósito, un evidente ejemplo resulta la promesa durante la campaña electoral de Mauricio Macri de construir tres mil jardines de infantes que fue, entre otras tantas, ampliamente incumplida.

universidades públicas “hay una invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada. ¿Les vamos a seguir regalando la educación?”. A inicios de 2016, el juez Pablo Cayssials declaró inconstitucional la reforma de la LES porque el establecimiento del ingreso libre e irrestricto socavaba la autonomía universitaria. El fallo no sólo no fue apelado por el Ministerio de Educación sino que además el propio Esteban Bullrich lo defendió: “el ingreso irrestricto responde a una ley demagógica del anterior gobierno”, afirmó en mayo de 2016.

La objeción a la condición gratuita del nivel superior no es una novedad en Cambiemos. De hecho, en 2007 diputados por entonces del PRO (Jorge Vanossi, Luis Galvalisi y Rafael Martínez) presentaron un proyecto de ley que asumía el clásico diagnóstico conservador sobre las universidades públicas: son inequitativas porque acceden gratuitamente mayoritariamente estudiantes provenientes de familias con altos ingresos. Para revertir tal inequidad, sugerían que las personas con altos ingresos que estén o hayan transcurrido por la universidad pública, realicen aportes a un Fondo Universitario de Fomento de Igualdad de Oportunidades, cuyo fin exclusivo era promover el acceso universitario a personas con bajos ingresos. También el por entonces diputado Federico Pinedo del PRO (actualmente Presidente Provisional del Senado de la Nación, por el mismo espacio político) elevó en 2007 un proyecto de ley que guardaba una orientación similar. Proponía que los/as responsables de los/las estudiantes que su situación patrimonial fuera la de contribuyente del impuesto a las ganancias, vean incrementado dicho impuesto en un 1%. La contribución sería depositada en una cuenta de la universidad pública cuyo destino, con exclusividad, sería la asignación de becas a estudiantes de escasos recursos económicos.

Más cerca en el tiempo, pero bajo una tónica similar, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, declaró en mayo de 2018 en el Rotary Club de Buenos Aires: “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la Universidad”. Más allá de la falsedad de la afirmación, lo importante aquí remite a la comunión con una filosofía

política que descansa en los pilares liberales de la igualdad de oportunidades: se trata de mostrar la inversión estatal en las universidades públicas como inequitativas, debiendo centrarse los esfuerzos estatales en los niveles de estudios anteriores. Esta filosofía explica también, en cierta medida, porque en su gestión el macrismo no ha creado ninguna universidad pública a nivel nacional (deteniendo así el ciclo expansivo de los últimos años de la administración kirchnerista) y desprestigia reiteradamente a las instituciones públicas universitarias.

El tratamiento del macrismo del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR), unos de los programas de cobertura más audaces y creativos de la administración kirchnerista para incidir en las trayectorias de jóvenes estudiantes (Gluz y Moyano, 2016), ilustra la opción por un modelo de igualdad de oportunidades que se articula con políticas de ajuste fiscal. En enero de 2018, a través del decreto 90, el presidente anunció una reestructuración en los criterios de asignación y cobertura del programa. Aunque parecía una continuidad, en rigor el gobierno alteró sensiblemente su lógica (Gluz y Ochoa, 2018). Por un lado, acotó los montos y la cobertura y, por otro, reinstaló criterios meritocráticos. Introdujo un aumento en el monto otorgado en 2018, por ejemplo, en las becas universitarias: de 12 cuotas de 900 pesos a 1600 (primer y segundo año), a 1900 (tercer y cuarto año) y a 2300 pesos (quinto año) en 10 cuotas. Además de reducir las becas a 10 meses, el monto se mantenía congelado desde el 2016, por lo que el pretendido aumento no se equiparó a la dinámica inflacionaria. Más aún, en la resolución 7/2019, publicada en el boletín oficial en febrero de ese año, el gobierno mantuvo el monto de las becas de 2018, con una inflación anual del 50%. También en línea con la reducción de programas educativos, durante 2016 y 2017 los supuestos “errores” técnicos en la carga y validación de información repercutieron en la expulsión del programa de al menos el 50% del total de inscriptos/as. Además, el decreto fusionó en el PROG.R.ES.AR becas preexistentes a nivel nacional que, en el caso del nivel superior, alcanzaban a la población de cualquier edad o hasta 35 años. Ahora, sólo para el caso de estudiantes avanzados/as de

nivel superior, el PROG.R.ES.AR contempla la obtención de la beca hasta los 30 años (inclusive). De este modo, el decreto impuso severas restricciones al acotar el universo de potenciales postulantes.

Asimismo, como se mencionó, el decreto reinstaló una lógica meritocrática. En vez de continuar garantizando la protección de quienes cumplieran requisitos de regularidad y presentasen una situación socio-económica vulnerable, para el caso de estudiantes universitarios/as se reintroduce, en línea con los criterios de los programas de becas de los años 90, al rendimiento académico como variable para la conservación de la beca. A su vez, se añade un bono extra a fin de año para aquellos/as estudiantes que aprueben el 100% de las materias estipuladas para el ciclo lectivo con un promedio de 8 o más puntos. Prosiguiendo el modelo de la igualdad de oportunidades, se trata de focalizar la asignación de los (supuestos) escasos recursos estatales en aquellos/as “pobres meritorios/as” y despreocuparse por los destinos de las mayorías populares.

De conjunto, el modelo político-económico y educativo macrista es profundamente elitista y regresivo para las aspiraciones educativas de gran parte de la población. Si bien restan datos concretos sobre la evolución del acceso, permanencia y egreso universitario durante el ciclo macrista, es posible aventurar que se ha configurado un escenario particularmente crítico. Si a la articulación del modelo de la igualdad de oportunidades con el desmantelamiento de programas y recortes presupuestarios, le añadimos el aumento del costo de la vida (por ejemplo, el boleto mínimo del colectivo en CABA y el Gran Buenos Aires ascendió en un 500% desde 2015) y de los índices de pobreza e indigencia, es posible concluir que las expectativas universitarias de las mayorías populares están siendo abiertamente impugnadas.

Seguramente, como en otros momentos históricos, la compleja y heterogénea comunidad universitaria, necesitará la conformación de espacios unitarios para enfrentar los embates hacia la universidad pública por parte de una nueva derecha. De igual modo, esta disputa será también preciso acompañarla por la desnaturalización y crítica de aquellos

procedimientos y dinámicas que inhiben una democratización política y social de las propias universidades públicas. Este doble desafío será decisivo ante una nueva derecha siempre hábil y astuta para desmantelar derechos y legitimar, a través de la lógica meritocrática, las profundas desigualdades socio-educativas.

Bibliografía

Dubet, F. (2016). *¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario)*. Bs. As.: Siglo XXI.

Gluz, N. y Moyano, I. (2016). Jóvenes y universidad. El PROG.R.ES.AR y la democratización del nivel superior. *Revista del IICE*, 39, p. 67-82.

Gluz, N. y Ochoa, M. (2018). Los cambios en el PROG.R.ES.AR: ni aumento económico ni mejora educativa, *Diario infobae*, 5 de febrero de 2018, Disponible: <https://www.infobae.com/opinion/2018/02/05/los-cambios-en-el-progresar-ni-aumento-economico-ni-mejora-educativa/>

Scaletta, C. (2017). *La recaída neoliberal. La insustentabilidad de la economía macrista*. Bs. As.: Capital Intelectual.

Vommaro, G. (2017). *La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder*. Bs. As.: Siglo XXI.